



## MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES TROPICALES Boletín Mensual - Número 199 - Febrero de 2014

### NUESTRA OPINIÓN

- La lucha por derechos y la importancia de la movilización y las luchas sociales

### TERRITORIOS ASEDIADOS POR MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES Y OTROS MEGAPROYECTOS

- Nigeria : Okomu Oil Palm – Destrucción de comunidades para expansión de la palma aceitera

En círculos inversores la compañía Okomu Oil Palm es presentada como un caso exitoso, luego de que, en 2013, pagara a sus accionistas los más altos dividendos de la historia. Pero en los agronegocios extractivos de este tipo, el éxito para los inversores cuesta caro a las comunidades.

- Sierra Leona: informe de Green Scenery sobre confrontación con SOCFIN por cuestiones territoriales

Un mes después de la confrontación entre propietarios de tierras de la jefatura de Sahn Malen, distrito de Pujehun, en el sur de Sierra Leona, y la compañía agrícola SOCFIN, Green Scenery publicó un informe de 13 páginas sobre las medidas autoritarias contra los miembros de la comunidad que habían estado defendiendo sus derechos sobre sus tierras.

- Indonesia: lucha contra la apropiación de tierras por parte de la plantadora de palma aceitera PT Hardaya

Los aldeanos del distrito de Buol, Sulawesi Central, están luchando desde hace 20 años para recuperar sus tierras. Todos sus bosques y tierras tradicionales han sido otorgadas, sin su consentimiento ni su conocimiento, para la creación de una enorme plantación de 22.000 ha de palma aceitera. Ese negocio dejó un saldo dramático: la destrucción de las tierras agrícolas y los bosques que utilizaban más de 6.500 familias.

- Chile: empresas forestales y derechos indígenas. un conflicto histórico

Históricamente, la relación entre las comunidades mapuche y la industria forestal ha estado marcada por el conflicto, básicamente en función del avance de la industria forestal en tierras reivindicadas por las comunidades mapuche y el impacto sobre el hábitat de dichas comunidades.

- Territorio manglar: "Cultura, tradición y espacio vital de los pueblos costeros"

El manglar, uno de los elementos fundamentales que sustenta la vida en las zonas costeras, es sobre todo territorio, base de la soberanía alimentaria de los pueblos costeros. Además de la industria del camarón sufre las amenazas de megaproyectos como la explotación petrolera, los mega proyectos turísticos, las represas y embalses de ríos, la minería metálica en las costas y lechos marinos, los monocultivos de árboles y de cultivos para agrocombustible – como la caña de azúcar y la palma africana –, grandes complejos portuarios, proyectos eólicos, ente otros.

## PUEBLOS EN MOVIMIENTO

- [Apoyo a los Tupinambá en Bahía, Brasil, ¡para la demarcación de sus tierras y en contra de la militarización!](#)
- [En Nigeria una coalición social exige una enmienda del PIB para restaurar la transparencia y la responsabilidad del sector petrolero](#)
- [La compañía austriaca Andritz recibió el premio infamante “Horror del año 2013” por su participación en megaproyectos desastrosos](#)

## RECOMENDADOS

- [Nueva página web de investigación sobre empresas transnacionales francesas - Multinationals Observatory](#)
- [“Allá vamos, otra vez”](#)

---

## NUESTRA OPINIÓN

- La lucha por derechos y la importancia de la movilización y las luchas sociales

La lucha por derechos a nivel internacional ha tenido un avance significativo en las últimas décadas. Numerosos países ya reconocen un conjunto de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Comunidades y pueblos, principalmente indígenas, que dependen del bosque, han obtenido un mayor reconocimiento en materia de derechos sobre los territorios que ocupan tradicionalmente. Aún así, a pesar de estos avances, la violación de los derechos continúa en aumento, como podemos ver en este boletín en los artículos y testimonios relativos a Nigeria, Sierra Leona, Indonesia, Chile.

Lo que llama la atención es que en estas historias de comunidades que buscan defender sus derechos, se considera que las empresas que acaparan sus tierras tienen derecho a hacerlo, o sea, se las ve también como portadoras de derechos. Y en el desigual juego de poder, los estados tienden a privilegiar los derechos individuales de las empresas y los derechos de los mercados libres en detrimento de los derechos colectivos de comunidades indígenas, campesinas y otras afectadas por las actividades de tales empresas.

Para avanzar en las luchas por los derechos, indudablemente es fundamental garantizar y mantener los derechos de las comunidades que, cada vez más, se ven afectadas por grandes proyectos empresariales que buscan apropiarse de sus territorios como también de la naturaleza en su conjunto (ver nuestro boletín de enero de 2014 sobre “servicios ambientales”). Además, la lucha por los derechos colectivos, como la de la Vía Campesina por el derecho a la soberanía alimentaria y por los derechos de campesinos y campesinas, tiene una gran importancia, justamente por ser derechos colectivos y no individuales, lo que significa que son derechos que no entran en la lógica del neoliberalismo. Dentro de esta lógica, las transnacionales creen tener derechos - individualizados- de apropiarse y de mercantilizar absolutamente todo: los territorios de pueblos y comunidades, las aguas e inclusive el carbono y la biodiversidad de los bosques que son vendidos para asegurar a las grandes empresas su “derecho a contaminar”.

Y también parece fundamental que la lucha por los derechos no puede estar dissociada de la lucha

que busca organizar y movilizar a las comunidades para defender lo que les es más sagrado: sus territorios. Éstos están más amenazados que nunca, si observamos las previsiones y los planes de las transnacionales dedicadas a la extracción de minerales y de petróleo, la construcción de hidroeléctricas y a proyectos de expansión del agronegocio. Por ello, las historias de las comunidades que luchan por su territorio, en la mayoría de los casos de forma aislada, muestran la importancia de la necesidad de organizarse y movilizarse, de buscar ampliar la posibilidad de alianzas con movimientos sociales y otros segmentos de la sociedad civil que comparten el compromiso con la lucha contra las injusticias y por la transformación social. Esto no solo parece ser crucial para hacer avanzar en la lucha por los derechos sino también para cuestionar más efectivamente las relaciones de poder injustas y desiguales que rigen el mundo y que implican que no se concreten los derechos fundamentales de la mayoría de los pueblos y se concedan numerosos derechos a una minoría que representa a los intereses del gran capital productivo y financiero- especulativo.

[inicio](#)

---

## TERRITORIOS ASEDIADOS POR MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES Y OTROS MEGAPROYECTOS

– Nigeria : Okomu Oil Palm – Destrucción de comunidades para expansión de la palma aceitera



La Okomu Oil Palm, que opera en el rubro del aceite de palma y la producción de caucho, fue establecida en 1976 como un proyecto piloto del gobierno federal de Nigeria, que ocupaba un área de 15.580 hectáreas de las cuales 12.500 podían ser dedicadas a la palma aceitera. En 1979, la compañía fue convertida en sociedad de responsabilidad limitada y, en 1990, en el marco de un programa de ajuste estructural, se transformó en una sociedad anónima (S.A.). Forma parte del grupo belga Socfin, de relevancia mundial en el cultivo de palma aceitera así como en el de hevea (para caucho), café y flores tropicales. El grupo Socfin es propietario del 62,69% de las acciones de Okomu Oil Palm.

Desde entonces, Okomu se ha convertido en una de las principales compañías de palma aceitera de Nigeria; en 2012, sus plantaciones ocupaban 9.713 ha en el Estado de Edo, y planeaba añadir 402 ha en 2013 y otras 400 ha en 2014.

El informe anual 2012 de la compañía anunciaba su intención de expandir sus plantaciones de palma aceitera y hevea y revelaba también que planeaba construir la mayor fábrica de aceite de palma de África, llevando su capacidad de producción en Sierra Leona de 30 a 60 toneladas por hora (ver el informe de Green Scenery sobre la violencia contra las comunidades en el artículo de

Sierra Leona más abajo).

Entre los inversores, la compañía Okomu Oil Palm está considerada como un éxito, debido a que en 2013 pagó a los accionistas los más altos dividendos de la historia. Ahora bien, en los agronegocios extractivos de este tipo, el “éxito” para los inversores tiene un alto precio para las comunidades locales.

En una entrevista con el WRM, el residente local Sunny Ajele habla del cambio que se produjo en la vida de las comunidades debido a la expansión de las plantaciones de palma aceitera de Okomu:

“Nuestra experiencia comenzó en 1998, cuando Okomu Oil Palm destruyó tres aldeas: Owieke, Ajbede y Ijawkam, sin que los aldeanos recibieran compensación alguna. Los jefes de las aldeas murieron de frustración cuando las topadoras llegaron sin anuncio alguno para destruir las aldeas. El gobierno estatal creó una comisión para investigar el caso, pero sus miembros nunca vinieron a visitar las aldeas. El informe de la comisión afirmó que los aldeanos eran ocupantes ilegales y que las aldeas habían sido fundadas recién en los años 1950, a pesar de que una sección de dicho informe contenía pruebas de que ya existían en 1935. También existía una ordenanza que daba a los aldeanos el derecho de cultivar, pescar y residir allí, fechada en 1912.”

“El informe de la comisión especial fue un duro golpe para los aldeanos. Luego, en 2010, la Okomu Oil Palm envió un aviso final a la comunidad de Makilolo – mi comunidad – dándole un plazo de algunos días para irse. La nota fue entregada por la policía militar. En ese momento la comunidad dijo “basta”, e hicimos saber al gobierno que si lo que quería era un entierro en masa, lo tendría. Pero aun así no obtuvimos ninguna respuesta.”

“Para entonces, el director general de la Okomu Oil Palm, el Dr. Graham Hefer, quien nos había advertido que firmáramos una carta de intención o seríamos expulsados, se fue de vacaciones. La carta de intención había sido redactada por la compañía, sin contribución de nuestra parte. La policía, las agencias de seguridad y los aldeanos se reunieron para intentar resolver la situación. El jefe de la policía dijo que, como la compañía tenía un certificado de ocupación, la aldea no podía ganar, y sugirió: ‘Vayan a rogar a la compañía que los deje quedarse’. Nosotros respondimos: ‘Eso no es posible’. Luego, la aldea se reunió también con el director general de la Okomu Oil Palm, quien propuso otra carta de intención y dijo que esperaba una decisión de la comunidad sobre la propuesta en un plazo de 24 horas.”

“Nadie en su sano juicio habría firmado esa carta de intención, que nos habría condenado directamente a la esclavitud. Por lo tanto, la aldea se negó a firmarla.”

“Entonces la compañía encerró a la comunidad, cortando el acceso al mercado. Para llegar al mercado debíamos dar un enorme rodeo a través de otro Estado, porque nos habían cerrado el paso. La ruta directa a la ciudad de Benin lleva aproximadamente una hora y media, pero si tenemos que tomar la ruta que atraviesa el Estado de Ondo, eso nos lleva un día entero.”

Sunny habló de encuentros con soldados sobre la ruta directa a Benin que los aldeanos usaban habitualmente, y dijo que esos soldados tenían la orden de disparar si veían aldeanos. El bloqueo duró desde el 17 de diciembre de 2010 hasta el 25 de febrero de 2011.

“Informamos a la policía que esa medida podía provocar disturbios, que los jóvenes iban a rebelarse si no se volvía a abrir el portón sin demora. No obstante, el portón siguió cerrado”,

explicó.

“Recibí un falso llamado a presentarme a la oficina. Cuando fui, me arrestaron en el lugar de la reunión, supuestamente por planear arrojar una bomba. Me encerraron durante un día y luego me liberaron. El 18 de enero de 2011, me convocaron nuevamente. Alguien había denunciado que yo había secuestrado a un hombre blanco en la plantación, y que ese hombre habría sido gravemente herido y enviado al extranjero para recibir tratamiento. Yo pregunté: ‘¿Cómo puedo haber hecho eso? Ese día yo estaba en la cárcel, aquí, con ustedes. ¿Cómo pude secuestrar a alguien en la plantación al mismo tiempo?’ Un funcionario del servicio de seguridad estatal me dijo que me estaban tendiendo una trampa, y que el problema era grave.”

“Entonces cancelé mi teléfono, dejé mi casa y huí. Me las arreglé para ponerme en contacto con el presidente del departamento jurídico de ERA/FoE Nigeria, el abogado Chima Williams, por intermedio de su responsable de proyectos sobre bosques y biodiversidad. ERA envió inmediatamente una carta a la dirección de Okomu Oil Palm S.A., exigiendo en primer lugar que el único portón de entrada y salida de la aldea, cerrado por la compañía, se abriera para los miembros de la comunidad, y en segundo lugar que no se exigiera a los aldeanos firmar una carta de intención en la que no habían participado. En ese momento, ERA me sugirió que dejara de huir.”

“Se organizó una reunión con el director general de Okomu Oil Palm, representantes de la comunidad, el servicio de seguridad estatal, soldados y jefes principales. El DG redactó entonces otro acuerdo, prometió aplanar la ruta, dar formación a 60 jóvenes por año, otorgar becas de estudio, mejorar la escuela... esas promesas debían estar implementadas para fines de 2011, siempre y cuando la aldea firmara la carta de intención que ya había rechazado anteriormente. Si esa propuesta no era aceptada, la compañía no daría nada. Y la aldea respondió: ‘No podemos firmar’.”

“Al mismo tiempo, la compañía empezó a tratar de persuadir a algunas personas de la aldea para que firmaran la carta de intención, y algunos terminaron por hacerlo. Luego la compañía declaró que había donado cuatro litros de aceite rojo de palma y muchos libros... pero los libros todavía están en la casa de quienes firmaron la carta sin el consentimiento de la comunidad. El que firmó la carta se convirtió en asesor especial en asuntos comunitarios ante la compañía. Toda comunicación con la compañía debe pasar por él (también está planeando presentarse como candidato a jefe principal).”

“A fines de 2013, la ruta todavía estaba a medio apisonar. En 2012, comenzaron a hacer un pozo porque el río que usaban los aldeanos ya no se puede utilizar durante la estación de lluvias, dado que recibe todos los agrotóxicos que aplica la compañía en la plantación. Los aldeanos siguen tomando el agua pero saben que no es buena para ellos.”

Las acusaciones y la criminalización continúan. Sunny Ajele, por ejemplo, fue acusado de organizar campamentos militares. Un funcionario le informó confidencialmente que la orden había sido de “encontrarlo, amarrarlo y liquidarlo”, en otras palabras, había que matarlo.

Desde entonces, la situación se ha vuelto algo menos tensa pero sigue siendo insoportable para la comunidad. Se “donaron” 50 acres a la aldea, con la condición de que no se construyera en ellos ninguna estructura permanente, ni se plantara nada, y que se mantuviera a los perros y las cabras fuera de las plantaciones, o la comunidad sería expulsada. Cada vehículo que llega o se va de la aldea debe pagar 200 nairas [aproximadamente US\$ 1,20] por el uso de la calle, y los camiones de víveres pagan más. Últimamente se dejó de cobrar por los vehículos personales, pero los



comerciales deben seguir pagando.

“Salir de la aldea o volver a casa es como atravesar una frontera. Si lo ven llegar con una cámara, se la confiscan”, explica Sunny. “La compañía tiene un hospital pero sólo para su personal, no para los aldeanos. También tienen derecho a venir y revisar cualquier ‘casa’ cuando se les ocurre. Nos acusan constantemente de robar frutos de palma. Más de 20 aldeanos han sido arrestados. Somos esclavos en nuestra propia tierra. La carta de intención da a la empresa el derecho de demoler nuestra aldea en cualquier momento, como hicieron con las otras tres aldeas. En esas tres zonas donde ya se había comenzado a plantar, la gente tiene prohibido entrar, los plantíos están vigilados por soldados pagados por la compañía.”

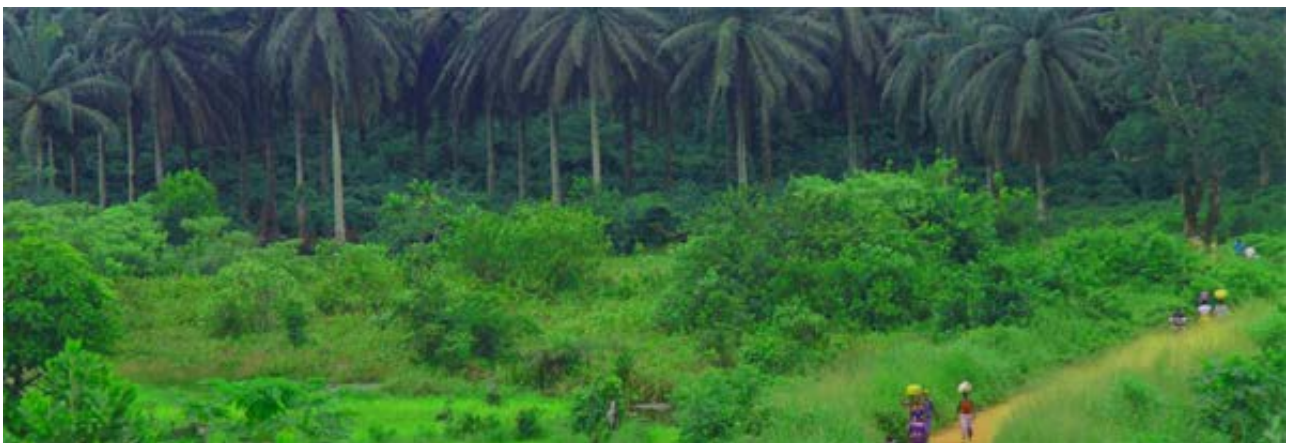
Esta historia muestra el verdadero costo de la expansión de la palma aceitera. Gente humilde y valiente, que defiende sus derechos, paga un alto costo y, a menudo, arriesga su vida. Y sin embargo, se dedican titulares a las compañías que se jactan de sus ganancias.

Artículo basado en una entrevista realizada por Jutta Kill, del WRM, a Sunny Ajele durante un encuentro internacional realizado del 2 al 5 de noviembre de 2013 en Calabar, Estado de Cross River, Nigeria. Ver también la Declaración de Calabar (<http://wrm.org.uy/meetings-and-events/calabar-declaration/>).

[inicio](#)

---

– Sierra Leona: informe de Green Scenery sobre confrontación con SOCFIN por cuestiones territoriales



Un mes después de la confrontación entre propietarios de tierras de la jefatura de Sahn Malen, distrito de Pujehun, en el sur de Sierra Leona, y la compañía agrícola SOCFIN (ver boletín nº 197 del WRM en <http://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section1/sierra-leone-farmers-reject-land-grab-for-oil-palm-plantation/>), Green Scenery publicó un informe de 13 páginas sobre las medidas autoritarias contra los miembros de la comunidad que habían estado defendiendo sus derechos sobre sus tierras.

El informe fue el resultado de un viaje de investigación realizado a la región para corroborar los hechos referentes al arresto policial y a las medidas autoritarias tomadas contra cincuenta y siete ciudadanos.

El informe de Green Scenery señala que “la compañía SOCFIN arrendó al gobierno un total de 6.500 ha. Si bien las comunidades y los propietarios de tierras denunciaron la forma como esto fue

realizado, SOCFIN ha podido conservar su control sobre el área y plantarla, aunque no toda, con palma aceitera. Esta operación de SOCFIN afecta a una población estimada de 9.000 personas y a 22 aldeas comprendidas en la zona.

Sin embargo, el insaciable deseo de más y más tierras de SOCFIN hace que ésta siga apoderándose de tierras, incluso más de las previstas en el contrato de arriendo. Las autoridades de la compañía han confirmado que controla actualmente 7.100 ha, es decir 600 ha de más, infringiendo así su acuerdo con el gobierno. Hay ahora más de cuarenta comunidades afectadas por sus operaciones, y una población total de más de 10.000 personas pero, a pesar de todo el conflicto que está causando ese acaparamiento de tierras, SOCFIN sigue trabajando con el Jefe Principal y su vocero para arrebatar más tierras y pasarlas a manos de la compañía.”

Green Scenery considera que “uno de los problemas del sector de tierras tiene relación con la administración”. Y explica que, si bien “el capítulo 122 [de la Constitución] puede ser visto como una ley, con una buena interpretación de su espíritu, que impide que se vendan tierras a extranjeros y se entreguen en cambio a las Autoridades Tribales (el Consejo de Jefatura), que está presidido por el Jefe Principal, tiene ciertos vacíos que están siendo explotados para hacer un mal uso de los textos. Esto está fomentando la actual inestabilidad en regiones como Malen, afectadas por el acaparamiento de tierras. Uno de esos malos usos se refiere a las tierras que se entregan en fideicomiso al Consejo de Jefatura en nombre de las comunidades. Supuestamente, el poner esas tierras en manos de las autoridades de la Jefatura autentica la ley consuetudinaria sobre la disposición o adquisición de tierras que se aplica en muchos lugares del país.

Pero el problema es que dicha ley está siendo infringida por algunas de esas autoridades, por el gobierno y por los agentes, debido a su imprecisión y a la definición poco explícita del papel del fideicomiso.

Es muy importante que durante este período de reforma constitucional se resuelvan los problemas de propiedad y tenencia de la tierra, y se corrijan cláusulas o palabras problemáticas que están causando confusión y tensiones en lo referente al territorio.

A medida que examinamos lo que está en juego, seguimos viendo la evolución en intensidad del conflicto en Malen; al observar el acaparamiento de tierras en Sierra Leona notamos que, en Malen, el conflicto que comenzó como un desacuerdo sin gravedad se ha convertido en una grave controversia, pero que en ningún caso se han tomado medidas proactivas para lidiar con el problema: guardarlo en un cajón esperando que se resuelva solo conlleva el riesgo de que pase a mayores. La situación actual requiere un diálogo franco entre todos los ciudadanos de Malen, sean o no propietarios de tierras. Requiere que se tomen decisiones lo bastante humanas como para respetar los derechos de los ciudadanos, y lograr que la población elija su propio destino.”

Fuente: "Report on the incident of police arrest and highhanded measure of fifty seven citizens in Malen Chieftdom, Pujehun district", Joseph Rahal y Milton Kainyande, Green Scenery, diciembre de 2013, publicado en enero de 2014, enviado por Frank Williams, Green Scenery, [f.williams@greenscenery.org](mailto:f.williams@greenscenery.org)

[inicio](#)



Los aldeanos del distrito de Buol, Sulawesi Central, están luchando desde hace 20 años para recuperar sus tierras. Todos sus bosques y tierras tradicionales han sido otorgadas, sin su consentimiento ni su conocimiento, a una de las familias indonesias más ricas y poderosas, el magnate Murdaya Widyawimarta y su esposa Siti Hartati Cakra Murdaya, por intermedio de su holding empresarial Cipta Cakra Murdaya Group, para la creación de una enorme plantación de 22.000 ha de palma aceitera. Ese negocio dejó un saldo dramático: la destrucción de las tierras agrícolas y los bosques que utilizaban más de 6.500 familias.

Cuando la operación comenzó, en 1994, muchos aldeanos se plantaron ante los camiones y se ataron a los árboles para evitar que los cortaran en los bosques de los alrededores de sus aldeas. Sin embargo, con los militares respaldando la operación, poco pudieron hacer. Finalmente, interminables plantaciones industriales de palma aceitera pertenecientes a la compañía PT Hardaya Inti Plantations cubrieron los campos en los que los aldeanos solían plantar árboles frutales y arroz.

Desde 2005, el área dedicada a la palma aceitera en Indonesia casi se ha duplicado, y cubre ahora 8,2 millones de hectáreas, es decir aproximadamente un tercio de toda la tierra arable del país. Sulawesi es uno de los blancos principales de la impresionante expansión que ha tenido este cultivo, incentivada por la creciente demanda mundial de aceite vegetal barato para la fabricación de alimentos y biocombustibles. No obstante, también es el resultado de una injusticia despiadada.

#### Fondo de pensiones noruego deja de invertir en ciertas compañías de palma aceitera

Indonesia comparte con Malasia la posición de líder mundial en la producción de aceite de palma, que ha aumentado exponencialmente en los últimos años. En Indonesia, la superficie plantada con palma aceitera aumentó en un 279% entre 1998 y 2008, convirtiendo, legal o ilegalmente, enormes extensiones de bosque tropical en plantaciones industriales, hasta llegar a unos 7 millones de hectáreas en 2009; en ese momento, el gobierno anunció su intención de añadir 18 millones más.

La expansión de las plantaciones de palma aceitera ha provocado numerosos conflictos con las comunidades locales, así como críticas generalizadas debido al desastroso impacto ambiental que ha tenido la destrucción masiva de bosques.

Noruega es uno de los países que invirtió en compañías de aceite de palma (637 millones de dólares en 21 compañías), entre ellas la empresa de Singapur



Wilmar International. Sin embargo, el mayor fondo de pensiones escandinavo, Storebrand, anunció recientemente que ya no invertirá más en compañías 'criminales para el clima', refiriéndose no sólo a las de energías no renovables como el carbón, que produce grandes volúmenes de emisiones de CO2, sino también a las que producen aceite de palma, cuyo auge es en gran medida responsable de la deforestación en los trópicos y, por consiguiente, una gran fuente de emisiones de carbono.

Fuente :

[http://www.theecologist.org/News/news\\_round\\_up/2259146/norwegian\\_pension\\_giant\\_drops\\_investments\\_in\\_coal\\_tar\\_sands\\_palm\\_oil.html](http://www.theecologist.org/News/news_round_up/2259146/norwegian_pension_giant_drops_investments_in_coal_tar_sands_palm_oil.html);

<http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/19-11-12/b-redygtig-palmeolie-sv-rt-opdrive-i-danske-butikk>;

<http://www.regnskog.no/no/s%C3%B8keresultat/attachment/30008/binary/27091?download=true&ts=137126c547d>

A pesar de las poderosas fuerzas alineadas contra ellos, los aldeanos del distrito de Buol estaban decididos a recuperar sus tierras. Una serie de bloqueos de rutas y otras acciones de protesta obligaron a PT Hardaya a negociar un acuerdo por el cual, en mayo de 2000, la compañía transigió en proveer unas 4.900 ha de tierras para compensar a los aldeanos desplazados, y en establecer un programa de cultivadores externos – conocido en Indonesia como agricultura plasma – según el cual la compañía prepararía y plantaría 2 ha de palma aceitera para cada familia y compraría la cosecha a un precio convenido.

Pero sólo un mes después, la compañía negó haber realizado dicho acuerdo y ofreció en cambio poner en marcha un programa de cultivadores externos en 15.000 ha ubicadas fuera de la concesión, en tierras que el gobierno provincial debería designar.

Para los aldeanos, esto fue un revés doloroso. Diezmados por años de lucha y sin apoyo alguno del gobierno, su protesta terminó extinguiéndose; así, la compañía pudo seguir adelante con sus operaciones y comenzó a expandirse fuera del área de la concesión.

El desmonte y la plantación de palmas aceiteras a lo largo de las riberas de los ríos y sobre las laderas de las montañas, tanto dentro como fuera de la concesión, provocó una fuerte erosión del suelo, y buena parte de éste terminó en el rápido curso del río Buol.

El programa de cultivadores externos prometido por la compañía casi no se ha materializado: hasta ahora, sólo 400 ha han sido destinadas al programa, y la mayor parte de esas tierras han terminado en manos de los políticos locales que apoyaron a la compañía.

Las condiciones de trabajo en la plantación son catastróficas. Más de 3.000 personas trabajan allí, muchas de ellas en tierras que antes les pertenecían. Viven en campamentos desvencijados y se les paga en base al volumen que cosechan.

Hamsi es uno de esos trabajadores; vive allí con su esposa e hijos, en una pieza estrecha de uno de los campamentos de la plantación. Él y su esposa han trabajado duramente, durante largas semanas, desde hace 13 años.

“Por más duro que trabajemos, siempre estamos endeudados”, dice Hamsi.

Si los trabajadores no salen de la pobreza, no es sólo por los magros salarios que paga la compañía: ésta les realiza constantes descuentos, por gastos de todo tipo, desde la electricidad y el agua que consumen en su hogar, hasta las herramientas y el equipo de protección que necesitan para trabajar. A fin de mes, dice Hamsi, ya no queda nada para cobrar.

La esposa de Hamsi, como otras trabajadoras de la plantación, se encarga de pulverizar pesticidas. Uno de los productos que se usa en abundancia es el Gramaxone (paraquat), un herbicida que está prohibido en más de 30 países debido a sus graves efectos sobre la salud humana. Ella cuenta que la compañía no le dio entrenamiento ni equipo protector, y que aplicó pesticidas durante sus embarazos y poco después del parto porque no podía permitirse tomar días libres no pagos.

En 2012, los trabajadores de la plantación formaron un sindicato y desde entonces presionan para obtener mejores condiciones laborales. Decidieron retomar la lucha contra la compañía, bajo la divisa de Foro Tani Buol. En 2012 organizaron un bloqueo de ruta y ocuparon la oficina del alcalde. Los funcionarios del gobierno y de la compañía respondieron prometiendo buscar un arreglo del conflicto territorial, pero nada se concretó. En marzo de 2013, campesinos y trabajadores ocuparon la planta procesadora de la compañía. El gobierno envió a los militares para sacarlos, pero no antes de que se las arreglaran para arrancarle una nueva promesa de solución.

A pesar de los años de promesas incumplidas, los aldeanos piensan con optimismo que pronto recuperarán sus tierras, e incluso están comenzando a hablar de lo que van a hacer con ellas cuando eso suceda. Están de acuerdo en que deberían manejarlas colectivamente y no como propietarios individuales, y reconocen que no van a tener más remedio que seguir produciendo palma aceitera hasta que los árboles actuales lleguen a la madurez y puedan ser reemplazados por otros cultivos.

La experiencia de las comunidades de Buol muestra que los profundos impactos que tienen las plantaciones de palma aceitera sobre la población local pueden agravarse con el tiempo. Los escasos beneficios que provee una plantación, tanto en empleos como a través de programas de cultivo externo, no compensan la pérdida de acceso y control de las tierras y el agua que las comunidades usan para satisfacer sus necesidades de alimento e ingresos.

En ese contexto, la solidaridad y la vigilancia internacional de la situación cobran enorme importancia. Los aldeanos se han esforzado por dar mayor relevancia internacional a su caso, y dicen que una de las maneras de ayudarlos es firmar una petición que enviarán a PT Hardaya Inti Plantation.

Puede leer la petición en apoyo de la lucha de los aldeanos de Buol en [http://www.grain.org/bulletin\\_board/entries/4870-petition-for-the-struggle-of-buol-farmers-forum-against-land-grabbing-by-pt-hardaya-inti-plantations](http://www.grain.org/bulletin_board/entries/4870-petition-for-the-struggle-of-buol-farmers-forum-against-land-grabbing-by-pt-hardaya-inti-plantations), o ponerse en contacto con los aldeanos a través de AGRA: [agraindonesia12@gmail.com](mailto:agraindonesia12@gmail.com).

Extractado y adaptado de “Long struggle against Indonesia oil palm land grab”, GRAIN, enero de 2014, <http://www.grain.org/article/entries/4868-long-struggle-against-indonesia-oil-palm-land-grab>

[inicio](#)

---

- Chile: empresas forestales y derechos indígenas, un conflicto histórico

Históricamente, la relación entre las comunidades mapuche y la industria forestal ha estado marcada

por el conflicto, básicamente en función del avance de la industria forestal en tierras reivindicadas por las comunidades mapuche y el impacto sobre el hábitat de dichas comunidades.

Tres son los grupos empresariales que monopolizan el mercado forestal en Chile: Forestal Arauco, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y MASISA. Las plantaciones forestales de estas grandes empresas concentran la propiedad de un total de 1.715.910 hectáreas de acuerdo a cifras del año 2007, en su mayoría en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, donde la propiedad forestal en el territorio mapuche tradicional triplica las tierras indígenas reconocidas por el Estado.

La mayor parte de las plantaciones forestales se han establecido en tierras ancestrales mapuche. Las comunidades afectadas por esta industria reclaman derechos de propiedad sobre las tierras forestadas, que les fueron usurpadas tanto durante la época de la colonia como con posterioridad al golpe de Estado de 1973.

#### Las “tierras usurpadas”

Las “tierras usurpadas” corresponden a aquellas tierras reivindicadas por los mapuche como de su propiedad pero que fueron adjudicadas por el Estado a particulares, o en otros casos fueron efectivamente usurpadas materialmente por éstos – en su mayoría empresas forestales – a pesar de la existencia de títulos de propiedad indígena.

Si bien posteriormente hubo una tibia política de restitución de tierras a pueblos indígenas, fue insuficiente y el problema de la tierra continúa.

Actualmente, el proyecto de ley de Fomento Forestal, que modifica y extiende el Decreto 701 - norma que regula la actividad e incentiva la forestación - apunta a expandir la industria forestal hacia los pequeños productores, canalizando fondos. Pero esto no significa que se priorice a los pequeños productores por sobre la gran empresa. Por el contrario; frente a la falta de tierras disponibles para el sector industrial, en gran medida debido a que éstas tienen la calidad de tierras indígenas o son terrenos muy pequeños, se busca impulsar una reconversión productiva en los campesinos indígenas y no indígenas, para que terminen cultivando para la gran industria, la que les fija el precio y compra su producción.

Es por ello que el modelo forestal de monocultivos industriales de árboles ha sido y continúa siendo un proceso invasivo en la sociedad mapuche ya que las plantaciones forestales presionan sobre la disponibilidad de las tierras y modifican los espacios territoriales así como la relaciones socio-espaciales de las comunidades mapuche. Ese avance de la industria forestal termina colonizando el territorio y obligando a las comunidades mapuche y pequeños propietarios a abandonar su sistema de vida y costumbres, forzándolos a generar microemprendimientos forestales o trabajar como empleados asalariados de la industria forestal.

No obstante, las comunidades no han claudicado en su empeño por reclamar los derechos sobre sus espacios territoriales ancestrales, lo que incluye la propiedad de las tierras y el control sobre el territorio, de modo de ejercer el derecho a establecer sus prioridades en materia de desarrollo y contar con los recursos naturales necesarios para asegurar su existencia organizada como pueblo.

Enfrentadas a una ley cuyo objeto ha sido el de reducir sus territorios, contando con mecanismos de reclamación que han defraudado la fe indígena en las instituciones estatales, y con mecanismos

de resolución de conflictos de tierras que han resultado ineficaces, las comunidades - que nunca han contado con mecanismos institucionales eficaces para que el Estado salvaguarde sus derechos -, han recurrido a la "toma" de predios para exigir sus demandas territoriales y visibilizar sus condiciones de exclusión y denegación de derechos. Son muchos los casos de ocupación de predios indígenas actualmente bajo dominio de empresas forestales y en conflicto.

Estos conflictos han derivado en situaciones muy graves de criminalización de los comuneros y líderes que han ocupado predios en conflicto, tipificando dichas medidas como delitos. Ello ha permitido iniciar procesos judiciales contra organizaciones, comunidades, miembros y líderes indígenas, acusándolos de cometer delitos comunes establecidos en el Código Penal, tales como: el incendio, la asociación ilícita, amenazas y el abigeato. Numerosos casos han concluido con su encarcelamiento y denostación ante la opinión pública. Además, se han utilizado leyes de excepción, como la ley antiterrorista o la ley de seguridad interior del Estado, lo que habilita a la judicatura a agravar las penas asignadas a los delitos comunes y suprimir garantías procesales.

La política del Estado chileno en relación a los recursos forestales del pueblo mapuche sigue siendo la de exclusión e imposición en un contexto acelerado de pérdida de bosques y la biodiversidad asociada a ellos, que se constata hoy en el territorio mapuche como consecuencia de la actividad de forestación exótica y de la proliferación de los monocultivos.

Extraído y adaptado del Documento de Trabajo "Pueblo mapuche y recursos forestales en Chile: devastación y conservación en un contexto de globalización económica", José Aylwin, Nancy Yáñez, Rubén Sánchez; Observatorio Ciudadano IWGIA, [http://www.observatorio.cl/sites/default/files/biblioteca/pueblo\\_mapuche\\_y\\_recursos\\_forestales\\_en\\_chile\\_devastacion\\_y\\_conservacion\\_en\\_un\\_contexto\\_de\\_globalizacion\\_economica.pdf](http://www.observatorio.cl/sites/default/files/biblioteca/pueblo_mapuche_y_recursos_forestales_en_chile_devastacion_y_conservacion_en_un_contexto_de_globalizacion_economica.pdf)

[inicio](#)

---

- Territorio manglar: "Cultura, tradición y espacio vital de los pueblos costeros"

Comunidades, pueblos y organizaciones de la sociedad civil han trabajado durante varios años para hacer visibles los importantes beneficios del ecosistema manglar y su existencia, luchando por reivindicar a los manglares como sistemas altamente productivos que constituyen medios de sustento y espacios donde se vive y practican las culturas y tradiciones de los pueblos costeros. "El manglar es nuestra empresa natural, es nuestro empleo, no nos pide antecedentes, hoja de vida o identificación, mientras tengamos salud podemos tirar la atarraya y sacar nuestro alimento", afirma Enrique Bonilla, presidente de Cogmanglar y pescador de Chameperico, Guatemala.

Hoy en día la percepción que se tenía de los manglares como espacios infestados de zancudos y mosquitos ha cambiado, pero la lucha por su defensa se hacen cada vez más fuertes ante nuevos y agresivos actores que amenazan su existencia y la de los pueblos y comunidades que los habitan desde América Latina, Asia y África. "Nos están exterminando lentamente, las políticas del gobierno nos criminalizan y empobrecen. No somos pobres, tenemos grandes riquezas que los poderosos quieren apropiarse, a eso le llamamos racismo ambiental", Marizhelia López del Movimiento dos Pescadores e Pescadoras de Bahía Brasil expresa así su preocupación por la pérdida de los territorios.

Además de la industria del camarón, histórica responsable de la destrucción de miles de hectáreas de manglares en las zonas tropicales, se suman al listado de amenazas la explotación petrolera,

los mega proyectos turísticos, las represas y embalses de ríos, la minería metálica en las costas y lechos marinos, los monocultivos de árboles y de cultivos para agrocombustible – como la caña de azúcar y la palma africana –, grandes complejos portuarios, proyectos eólicos, ente otras. Todas estas actividades amenazan cada vez más los medios de vida colectivos y la vida de los pueblos costeros y configuran un proceso de privatización y acaparamiento de los territorios, de extracción y explotación de la naturaleza que benefician exclusivamente a intereses particulares y privados. Como un ejemplo de esto, recientemente en Honduras el gobierno lanzó la propuesta de las ciudades modelo o Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en la zona sur del país, según el Comité de la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (Coddeffagol), la propuesta es aberrante y representa daños irreversibles a los humedales manglares del Golfo.

El manglar, considerado entre las cinco unidades ecológicas más productivas del planeta, es la principal fuente de alimento y sustento para millones de familias costeras que practican la pesca artesanal y de subsistencia, la recolección de conchas, caracoles, cangrejos. Por ello, el manglar es base de la soberanía alimentaria de los pueblos. Además el manglar es una barrera natural ante los impactos del cambio climático. Para Silvia Quiroa de CESTA, El Salvador: “La crisis climática es una realidad que ya está afectando a comunidades y pueblos, debemos cuestionar y oponernos a la instrumentalización de los manglares como sumideros de carbono, la sobrevivencia de los pueblos será el camino”

Sobre todo, el manglar es territorio; es uno de los elementos fundamentales que sustenta la vida en las zonas costeras, que en la mayoría de los países son zonas de uso público. Para Líder Góngora de Ccondem Ecuador: “Es importante reconocer la maternidad del manglar, es como una matriz donde se crían, protegen y reproducen diversidad de especies”.

Reivindicar el carácter público de los territorios marino costeros es estratégico, y al mismo tiempo los derechos colectivos de las comunidades y pueblos que los habitan a decidir sobre su gestión, protección, utilización y administración colectiva. Es un derecho que les corresponde porque han sido quienes durante largo tiempo han garantizado la existencia de los manglares en función de su sabiduría, su cultura propia y sus conocimientos y tradiciones ancestrales, transmitidas de generación en generación. “En Guatemala durante décadas se han privatizado las Reservas Territoriales de la Nación, utilizadas por los políticos como botines en sus campañas, aún existen grandes intereses de terratenientes, azucareros, camaroneras y urbanizadoras por continuar acaparando más territorios”, Sergio Maldonado, Avedichamp, Guatemala.

En la lucha por los manglares, las mujeres tienen un papel fundamental, la contribución de las mujeres en el desarrollo local, comunitario, así como sus aportes a la construcción y defensa de los territorios, y al resguardo y transmisión de los conocimientos, son imprescindibles, deben ser valorados y visibilizados. Por otra parte es necesario reconocer la situación de desigualdad entre hombres y mujeres para fomentar la justicia y equidad social.

Los integrantes de la Redmanglar Internacional pensamos en un mundo donde se privilegie el uso ancestral del territorio para sostener la vida por encima del negocio, donde las poblaciones locales recuperen su economía propia y tengamos intercambios solidarios y equitativos entre pueblos.

Por Carlos Salvatierra, Secretario Ejecutivo Redmanglar Internacional. Texto basado en diálogos de reunión estratégica de Redmanglar, febrero 2014.



---

## PUEBLOS EN MOVIMIENTO

- Apoyo a los Tupinambá en Bahía, Brasil, para la demarcación de sus tierras y en contra de la militarización!

Una vez más les pedimos que apoyen la lucha legítima del pueblo indígena Tupinambá en el estado de Bahía, Brasil.

Los estudios oficiales de la FUNAI, órgano gubernamental brasileño responsable de las cuestiones indígenas, demuestran que los Tupinambá ocupan tradicionalmente una superficie de 47.000 hectáreas en el sur de Bahía y, por lo tanto, tienen un derecho constitucional sobre ese territorio. A pesar de eso, el Ministro de Justicia aún no ha firmado las ordenanzas para la demarcación, como consecuencia de las presiones de intereses no indígenas contrarios la demarcación. Estos grupos han logrado que la justicia brasileña emita decisiones preliminares solicitando que se expulse a los indígenas de sus propias tierras. Para empeorar aun más la situación, ahora también el ejército brasileño, además de la fuerza nacional y la Policía Federal, ha ocupado la región en un intento por intimidar y expulsar a los Tupinambá de sus tierras.

El conflicto se ha agudizado y los intereses contrarios a los indígenas han incitado a una oleada racista y discriminatoria contra los Tupinambá (ver video [http://www.youtube.com/watch?v=s3\\_jFLJRM3c](http://www.youtube.com/watch?v=s3_jFLJRM3c) ).

Los invitamos a apoyar y solidarizarse con esta lucha enviando con urgencia una carta a la Suprema Corte (ver modelo de carta en [http://cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&conteudo\\_id=7370&action=read](http://cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&conteudo_id=7370&action=read) ).

Para interiorizarse más de la situación sugerimos leer la siguiente nota de solidaridad con los Tupinambá y pequeños agricultores de la región ( <http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&action=read&id=7375> )

[inicio](#)

---

En Nigeria una coalición social exige una enmienda del PIB para restaurar la transparencia y la responsabilidad del sector petrolero

En Nigeria, se formó una coalición de organizaciones por la justicia social y ambiental (Environmental Rights Watch/Amigos de la Tierra Nigeria, Green Alliance Nigeria, Host Communities Network of Nigeria y Students Environmental Assembly Nigeria) con el fin de presionar a los políticos electos para que aprueben una versión mejorada del “proyecto de ley sobre la industria petrolera a favor del pueblo”, el PIB2012.

El 25 de febrero de 2014, la coalición pidió al gobierno que aprobara el PIB “no tal cual es actualmente sino con una enmienda propuesta por la coalición de la sociedad civil”.

La coalición considera que la aprobación del proyecto enmendado es “la oportunidad de poner coto al dominio de las empresas, al desprecio absoluto de los medios de vida locales, a la degradación irresponsable del medio ambiente, a la violencia, la corrupción y el robo que, desgraciadamente, han caracterizado a la industria petrolera nigeriana”.

Para ERA, una de las organizaciones por la justicia ambiental que participan en la iniciativa, la aprobación de esta ley es importante porque “vemos ciertas disposiciones del PIB como un medio para resolver violentos conflictos que duran desde hace décadas, y para restaurar la transparencia y la responsabilidad en el sector petrolero de Nigeria”, dijo Godwin Ojo, director de ERA.

<https://www.facebook.com/pages/Environmental-Rights-Action-Friends-of-the-Earth-Nigeria/81335606026>;

<http://www.mydailynewswatchng.com/2014/03/05/erafoen-others-final-push-pib/>;

<http://nnimmo.blogspot.de/2013/04/draft-petroleum-industry-bill-not.html>

[inicio](#)

---

- La compañía austriaca Andritz recibió el premio infamante “Horror del año 2013” por su participación en megaproyectos desastrosos

El premio “horror del año” es otorgado por la Network Social Responsibility (NeSoVe), – una red constituida por ONG y representantes de los trabajadores – a compañías, organizaciones, instituciones e individuos que han actuado en forma muy irresponsable y sin considerar los daños sociales o ambientales, a menudo sirviéndose de informes sumamente elaborados sobre la responsabilidad ambiental y social, y recurriendo a las presiones y al mecenazgo. El objetivo de este premio infamante es revelar y denunciar este comportamiento para exigir que la empresa se haga responsable.

En 2013, el premio “horror del año” fue para la compañía austriaca Andritz, por su participación en la construcción de tres represas que tienen impactos nefastos sobre la ecología y los derechos humanos: Xayaburi en Laos, Belo Monte en Brasil e Ilisu en Turquía. Las tres represas están ubicadas en zonas ecológicamente muy sensibles, y en los tres casos decenas de miles de personas debieron abandonar sus hogares, a menudo bajo amenazas de las fuerzas militares o de seguridad.

La compañía también acaba de firmar los contratos para otro megaproyecto desastroso: la planta de celulosa de OKI, perteneciente a Asia Pulp & Paper, en medio de los bosques tropicales de la isla indonesia de Sumatra. La capacidad nominal de dicha planta la convertiría en la mayor productora de celulosa del mundo. Las comunidades afectadas temen que se contaminen los ríos de las cercanías, lo cual tendría graves efectos sobre la pesca y la agricultura, como ya ha sucedido en la región con otras fábricas de APP.

Ver el comunicado de prensa de ECA Watch Austria en [http://www.schandfleck.or.at/wp-content/uploads/2014/01/ECA-Watch PA Andritz Schandfleck en 20140221.pdf](http://www.schandfleck.or.at/wp-content/uploads/2014/01/ECA-Watch_PA_Andritz_Schandfleck_en_20140221.pdf)

[inicio](#)

---

## RECOMENDADOS

- Nueva página web de investigación sobre empresas transnacionales francesas - Multinationals Observatory – Recursos en línea e investigaciones exhaustivas sobre los impactos sociales, ecológicos y políticos de las transnacionales francesas. Ver en francés: <http://multinationales.org/?lang=fr>, y en inglés: <http://multinationales.org/?lang=en>

- “Allá vamos, otra vez” – En todo el mundo, el “desarrollo” está usurpando a los pueblos indígenas su tierra, su soberanía alimentaria y su orgullo. A cambio, no les deja nada. “Allá vamos, otra vez” es un breve video satírico de Survival International, que cuenta la historia de cómo se destruye a los pueblos indígenas en nombre del “desarrollo”. Dentro de pocos días se hará el lanzamiento de la versión subtitulada al castellano de este video, el cual podrá verse en <http://www.survival.es/>

